

VIOLENCIA EN LA ARAUCANÍA: RELATO EN PRIMERA PERSONA

TEXTO DE LA PRESENTACIÓN DE JOSÉ ANTONIO GALILEA – EX MINISTRO DE AGRICULTURA Y AGRICULTOR DE VICTORIA

Agradezco la invitación de la SNA a participar de esta ENAGRO 2012 y en especial, a compartir con UDS. una mirada de la situación que afecta a la Región de la Araucanía, en relación al, a mi juicio, mal denominado conflicto mapuche.

Imagino que no es habitual que un tema de carácter regional sea abordado en forma tan especial en este tipo de encuentros y me alegro que así sea. Es muy grato además tener la oportunidad de hacerlo junto a don Juan Agustín Figueroa, con quién nos conocemos desde hace muchos años y nos tocó trabajar juntos cuando era Ministro de Agricultura y yo Diputado.

El tema que nos corresponde tratar no es nada fácil, es complejo y con aristas que van desde la seguridad, a aspectos de carácter histórico, pasando por el derecho de propiedad, las implicancias sociales, las políticas públicas y la seguridad jurídica, entre muchos otros. Por esa misma razón, entregar un punto de vista que sea compartido o incluso mayoritario, resulta virtualmente imposible y por tanto advierto de la partida que no es mi intención hacerlo, sino más bien entregar una visión personal, que es por lo demás el encargo que se me planteó en la invitación a esta ENAGRO.

Sin perjuicio de lo anterior, quiero decirles que me precio de conocer bastante bien la realidad del pueblo mapuche en el sur, no solo porque allí he hecho buena parte de mi vida, sino además porque me tocó representar la región por 16 años en la Cámara de Diputados. Esto último, que implica haber recorrido cientos de veces las comunas, los sectores rurales y las comunidades y haber tenido un estrecho contacto con su gente, permiten una visión que no necesariamente compartirán aquellos que no han tenido esa oportunidad.

Qué duda cabe, la violencia rural o las expresiones violentas del llamado conflicto mapuche, preocupan a la Araucanía en su conjunto, a todas sus autoridades y a la ciudadanía de la región en general. El hecho de que en este encuentro se le brinde un espacio, es signo de que genera inquietud también en el resto del país. Ya era hora, un asunto serio como este no puede quedar exclusivamente reservado a la preocupación de los afectados directamente, a las autoridades regionales o a sus habitantes. Más allá de que sus efectos tengan un alcance local directo, el problema es claramente nacional y estoy convencido que mientras antes se entienda que así es, más pronto será posible darle adecuada solución.

El primer aspecto que me gustaría resaltar, es el hecho de que, en mi concepto, durante años el Estado y los diversos gobiernos han sido incompetentes para enfrentar el tema mapuche en sus diversas dimensiones. Incompetentes para hacer frente a la pobreza en que viven – si tuviéramos que caracterizar un habitante de los más pobre de Chile tendríamos que decir que es de región, es niño, es mujer y es mapuche – incompetentes para resguardar su cultura y para asegurar el acceso a mejores niveles de educación, atención de salud, vivienda y condiciones de vida en general.

Las políticas públicas en materia indígena se han caracterizado por años en tener un fundamento casi exclusivamente asistencialista.

El tratamiento del que han sido objetos, ha buscado disponer recursos para financiar iniciativas que les ayuden a salir de la pobreza, pero muchas veces sin reparar ni tener en cuenta, que se trata de comunidades, familias e individuos con particularidades distintas a los demás pobres de Chile, que no pertenecen a una etnia determinada. De algún modo, se ha impuesto la teoría de que “son sujetos de políticas sociales por la pobreza en que viven y no necesariamente por su condición de mapuches y todo lo que ello implica desde el punto de vista cultural”. Pero tampoco esas acciones del Estado han tenido éxito y la prueba está en que, en general, la mayoría se mantienen en una situación de vulnerabilidad social y al

mismo tiempo, tampoco se han atendido adecuadamente sus demandas en materia de reconocimiento, respeto a la cultura y otras características que les son propias.

Por largos años he sido testigo, al igual que muchos, de programas, planes e iniciativas para las cuales nunca se consultó su opinión, planificadas centralmente sin participación de las comunidades y mucho menos de sus líderes, especialmente en el ámbito productivo. Cuantiosos recursos invertidos, por ejemplo a través de programas como Orígenes, no tuvieron resultados verdaderamente positivos y me atrevería a decir, mal evaluados hasta por los propios beneficiarios.

La politización, la imposición de enfoques de desarrollo ajenas a su cultura, la falta de participación y la discrecionalidad con que se elegía a las comunidades sujetas al programa, terminaron por desprestigiarlo, con una enorme dilapidación de recursos y sin generar un efecto realmente relevante. A lo anterior, debo agregar la frustración que genera echar por tierra expectativas sembradas por largo tiempo.

Esa es la razón por la cual resulta tan difícil comprender, que los mismos que tomaron esas decisiones ayer o las apoyaron, hoy sean tan críticos del trabajo que están realizando las actuales autoridades regionales y de organismos como CONADI e INDAP. Hago mención a lo anterior no por plantear simplemente una crítica política, sino porque, en primer lugar, si hay un tema en la Araucanía que requiere y demanda un tratamiento con altura y cierto grado de unidad, es justamente este. Algunos han preferido convertirlo en bandera de lucha para sacar pobres dividendos políticos, lo que tampoco van a conseguir. Y la segunda razón, es que hoy, indudablemente, se advierte un esfuerzo serio por otorgar participación y construir sobre la base del diálogo con todos aquellos que tengan real intención de buscar formas apropiadas para enfrentar el conflicto.

Una demostración concreta es ENAMA, el primer Encuentro Nacional Mapuche que se realizó este año en Temuco, liderado por Hugo Alcamán y que contó con una masiva participación y el resuelto apoyo de las autoridades, gremios, universidades, etc.

La reciente creación del Área de Desarrollo Indígena en la zona de Ercilla, inaugurada la semana pasada por el Presidente de la República, es otra demostración concreta del dialogo con que se busca generar una nueva forma de relacionarse con las comunidades mapuches del sector, donde más hechos de violencia se han producido.

La crítica a la creación de esta nueva ADI, ha provenido de los grupos más extremos y violentos, con quienes cualquier esfuerzo de entendimiento parece no dar resultado si no es en sus términos y condiciones. La intransigencia ha llegado a un punto en que cuesta reconocer cuales son realmente sus demandas y la viabilidad de ellas.

Sin embargo, la iniciativa encuentra también detractores en otros sectores que parecen entender que se está premiando a los violentistas, cuestión que no comparto.

No deja de ser relevante que un total de 37 comunidades de 42 y que involucra a más de mil familias, hayan decidido incorporarse a esta iniciativa. Entiendo que muchas de ellas con ciertas desconfianzas, pero no cabe duda que se están dando una oportunidad para que el dialogo prevalezca y por esa vía aportar a la paz en la zona. Comparto que la creación de otras ADIs no han sido particularmente exitosas y por lo mismo, es necesario fortalecer el mecanismo que bien aplicado y con las expectativas bien acotadas, resolverá lo que a mi juicio ha sido un error por años; no involucrar a las comunidades en las decisiones y políticas que se impulsan en su favor.

Es necesario cuidar que el alcance de la ADI no sea interpretado como el instrumento para conseguir objetivos para la que no fue creada, sino una instancia de participación en las inversiones, prioridades y objetivos de y en las comunidades participantes.

No quiero que en caso alguno se entienda que por lo expuesto estoy intentando explicar y mucho menos justificar los hechos de violencia que ya por 15 años afectan a la región. De ningún modo. El contexto al que me he referido, creo que permite encontrar parte de las razones por las cuales la convivencia se ha vuelto tan compleja en muchos lugares. La situación descrita colaboró a generar un ambiente propicio para las expresiones más radicales del movimiento indígena, alentado en muchos casos desde fuera de las comunidades y mediante un trabajo ideológico sostenido que llegó a convencer a muchos que sus demandas serían atendidas a través del uso de la violencia, la intimidación y el miedo.

Es justamente esto último, otro aspecto al que quiero referirme.

No es una frase más sostener que la inmensa mayoría de las comunidades de la región no están involucradas en la opción violenta y extremista, más aún, están claramente en contra. Desde mi punto de vista, estamos frente a situaciones distintas y que por lo mismo, requieren ser abordadas en formas diversas.

Por una parte hay cientos y si no miles de comunidades y en cualquier caso la enorme mayoría, que esperan pacientemente que la acción del estado y las políticas públicas se hagan cargo de su condición de marginalidad y pobreza. El problema de la tierra es UN aspecto dentro de sus muchas inquietudes y carencias, pero no necesariamente una prioridad. Como comprenderán, conozco las iniciativas que se ha impulsado para atenderlas y el aumento de recursos destinados, por ejemplo, a través de los Programas de Desarrollo Territorial Indígena, PDTI que ejecuta INDAP, que pasó de 2 mil familias el 2010 a 20 mil las que hoy están bajo su cobertura.

Un segundo grupo son aquellas que, estando en una situación similar a las anteriores, el elemento tierra está dentro de sus prioridades más sentidas y por lo mismo, la espera para que sus demandas sean atendidas los llevan a incurrir en acciones como las tomas de

predios que se utiliza como elemento de presión, a los propietarios para que vendan y al Estado para que compre. En no pocos casos esas tomas son violentas, a veces la ocupación es permanente y paraliza las posibilidades de los propietarios de mantener las tierras productivas.

No tengo que abundar en argumentos para explicar que los compromisos asumidos por el Estado de comprar tierras a muchas comunidades, ejerce un verdadero incentivo a la toma y ocupación. Conozco agricultores que simplemente hace años no pueden sembrar parte de sus campos o viven bajo permanente amenaza de toma.

Separo de estas dos situaciones que he descrito, aquellas que se han desbordado completamente. Ocupaciones de campos con individuos armados, asaltos a predios y quema de casas, escuelas y camiones, enfrentamientos violentos con la policía, destrucción de maquinaria agrícola y forestal, galpones y bodegas, robo de animales, etc. Incluso algunos de estos hechos y como es conocido, con el resultado de muertes y heridos incluyendo por cierto personas mapuches y carabineros. Todo un escenario que ha obligado a que varias decenas de propietarios requieran de protección policial permanente.

Por desgracia, hechos como estos han aumentado en el último tiempo tanto en número como en violencia y la sensación generalizada es que no se está haciendo por parte de la autoridad, lo suficiente para detener a los autores, muchos de los cuales están identificados, así como sus cabecillas y volver a la normalidad las zonas de mayor conflicto. Esta sensación de impunidad es fruto, en parte importante, de la desinformación que en general existe respecto del trabajo que realizan las autoridades y las policías. Entiendo que contar con mayores antecedentes no necesariamente disminuirá los hechos ni calmará la preocupación, inquietud y no pocas veces temor de quienes viven y trabajan en las zonas donde se producen mayor número de acciones violentas.

Es cierto, pero indiscutiblemente resulta alentador saber que existe voluntad y un trabajo resuelto por terminar con estos hechos y permite contar con la colaboración valiosa de los mismos afectados.

A mi juicio es un error de las autoridades y sé que no es deliberado, no transmitir con cierta periodicidad lo que se está haciendo y no estoy ciertamente pidiendo que se publicite la estrategia porque en ese mismo momento dejaría de ser efectiva.

Hace unos días tuve la oportunidad de participar en una reunión con el Intendente, las autoridades policiales y dirigentes de gremios, en la que se entregaron muchos antecedentes de las acciones que se están llevando adelante y creo no equivocarme si digo que los asistentes salimos algo más tranquilos.

El mismo efecto se produjo con la reciente visita del Presidente Piñera a la Región y en los posteriores encuentros que sostuvo. Es claro entonces que el contacto con los gremios y las personas directamente afectadas o que se sienten amenazadas y la información que se pueda proporcionar, resulta un aspecto clave y la autoridad debe instaurar un mecanismo en tal sentido. Lo mismo ocurre con las propuestas que se han entregado en materia de seguridad, tierras, aplicación de la ley y otras.

En relación a la política de entrega de tierras, es necesario clarificarla completamente, tanto en la forma como en el alcance que tendrá y en especial, los esfuerzos que irán aparejados para resguardar que ellas permanezcan en producción y de ese modo asegurar mejores condiciones de vida a quienes se les adjudican.

Tengo claro que para la actual administración la compra de tierras está acotada a un número conocido de comunidades. Sin embargo impera la convicción de que las presiones, de diversa índole y en particular la violencia, llevarán esa determinación más allá de lo que está comprometido.

La misma incertidumbre produce la política y la voluntad que sobre la materia tenga un futuro gobierno. Esa es la razón por la que es necesario enfrentar el problema como política de Estado y sacarlo de la trinchera en la que hoy se encuentra. El denominado conflicto de la Araucanía tiene un alcance nacional y debiera preocuparnos el hecho de que este tipo de problemas son hoy mucho más difíciles de enfrentar, con el deterioro en que está sumida la calidad de la política.

Respecto al apoyo productivo para las comunidades beneficiarias de estas tierras, resulta indispensable y urgente. Sé que es parte de las preocupaciones y del trabajo que realizan las actuales autoridades y los recursos a los que me referí para los PDTI, se incluyen en ese esfuerzo.

Por años la entrega de tierras fue un objetivo en sí mismo y nada se hizo para que produzcan en beneficio de las comunidades destinatarias. Una enorme irresponsabilidad, social y económica que mantiene un impresionante rezago y por lo mismo, difícil de reparar en corto tiempo.

La Araucanía, reúne un importante número de comunas que están dentro de las más pobres de Chile y una muy baja inversión privada y no se puede dar el lujo de tener 300 o 400 mil hectáreas improductivas.

Sobre el particular, he escuchado y leído muchas veces que los mapuches no son agricultores a partir de sus raíces históricas, pero no es lo que se observa al recorrer la región. En todos aquellos lugares donde viven y con las dificultades propias por la falta de apoyo, capacitación y recursos, practican la agricultura y la ganadería. Llevan varias generaciones dedicados a estas actividades y por tanto no hay razón para no incentivar y respaldar que las tierras entregadas entren al circuito productivo.

Quiero agregar algo más a este respecto y que en lo personal me preocupa enormemente. A partir de la entrada en vigencia de la ley indígena y la discriminación positiva en la que se

inspiró, sumado a las decisiones de las autoridades desde que arranca el conflicto, en orden a entregar beneficios diversos a las personas y comunidades mapuches, el sentimiento de los habitantes no mapuches ha ido cambiando, especialmente entre los pequeños agricultores.

En efecto, muchos de ellos piensan y sienten que se discrimina en su perjuicio, al no tener acceso a beneficios y ayudas que si están disponibles para los primeros. Mi impresión es que esto, ha incrementado un sentimiento que ahonda las diferencias e indiscutiblemente es negativo para la región y nuestra convivencia presente y futura. Estimo que estamos frente a un problema que requiere corregirse y que eventualmente pasa por mejorar incluso la difusión de los programas e iniciativas en favor de los pequeños agricultores en general.

Creo haber hecho mención a los aspectos medulares de la situación de nuestra región. Como lo señalé al principio, esta tiene muchas otras aristas y variables sobre los que se requiere mayor análisis.

Es escaso el tiempo para entrar en todas ellas, pero no puedo dejar de señalar, aunque sea modo de titulares, que muchos de sus habitantes viven con miedo. Que las acciones violentas y la inseguridad parecen exceder los esfuerzos que se puedan estar haciendo para ponerles términos y por tanto hay dudas sobre su eficacia. Que la aplicación de justicia está puesta de manera permanente en tela de juicio, que es necesario efectuar una evaluación y perfeccionamiento de la legislación indígena, que en muchos aspectos parece haber ido más allá del espíritu que el legislador en su minuto tuvo al aprobarla. Que los problemas de Derechos Humanos se abordan con una mirada completamente parcial e ideologizada, en fin, que la combinación de región empobrecida y en conflicto, es simplemente fatal.

Antes de terminar, no puedo dejar pasar la ocasión para solidarizar con todos aquellos que durante estos años han sido víctimas de ataques, delitos, robos, intimidación y atropellos. La mayoría de ellos medianos y pequeños agricultores y también mapuches, transportistas y empresarios que solo buscan progresar en paz. No debemos dejar que unos pocos sujetos

violentos que escogieron el camino equivocado, nos aparten del objetivo de vivir y trabajar para construir una región que progrese para todos.

Estimados asistentes a esta ENAGRO, me alegra haber tenido la oportunidad de exponer ante Uds. la cara mala de nuestra región, la que no nos gusta, pero acepté para hacer conciencia del problema que vivimos ante los agricultores del país y que para mí excede las fronteras regionales.

La Araucanía tiene una cara mucho mejor y la conforman su gente, su multiculturalidad, su paisaje y recursos naturales, su agricultura que está en un potente proceso de cambio, el turismo y las enormes oportunidades que ofrece, y un sin número de otras actividades como la forestal, la industria, y la ganadería. Esa cara es la que queremos que el resto del país reconozca y en especial, el esfuerzo de sus habitantes por lograr el anhelado pero a veces esquivo desarrollo.

Muchas Gracias.